

«Fallamos: Que desestimando las causas de inadmisibilidad invocadas por el señor Abogado del Estado y desestimando a su vez el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Octavio Vázquez Sotelo contra resoluciones del Ministerio de Defensa de once de octubre de mil novecientos setenta y siete y uno de marzo de mil novecientos setenta y ocho, debemos declarar y declaramos aparecer las mismas ajustadas a derecho, sin expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363), ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3 de noviembre de 1981.

OLIART SAUSSOL

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME).

27928

ORDEN 111/02863/1981, de 3 de noviembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 2 de junio de 1981, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Néstor Almarza Basterra.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Néstor Almarza Basterra, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 16 de diciembre de 1978 y 6 de febrero de 1979, se ha dictado sentencia con fecha 2 de junio de 1981, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Néstor Almarza Basterra, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de dieciséis de diciembre de mil novecientos setenta y ocho y seis de febrero de mil novecientos setenta y nueve, que declaramos ajustadas a derecho, sin expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363), ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3 de noviembre de 1981.

OLIART SAUSSOL

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME).

27929

ORDEN 111/10182/1981, de 4 de noviembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid, dictada con fecha 21 de julio de 1981, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Aniano Martínez Martínez.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, entre partes, de una, como demandante, don Aniano Martínez Martínez, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra acuerdos de la Dirección General de la Guardia Civil de 24 de diciembre de 1975 y del Ministerio del Ejército de 1 de junio de 1975, se ha dictado sentencia con fecha 21 de julio de 1981, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que no dando lugar a las dos causas de inadmisibilidad de "acto irrecurrible por norma de rango legal" y de "falta de legitimación activa", alegadas por la Abogacía del Estado, debemos estimar y estimamos, solo en parte, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Aniano Martínez Martínez, contra los acuerdos de la Dirección General de la Guardia Civil de veinticuatro de diciembre de mil novecientos setenta y cinco y cinco del Ministerio del Ejército de uno de junio de mil novecientos setenta y cinco, por no ser conforme con el ordenamiento jurídico y, en su consecuencia, los anulamos y declaramos el derecho del recurrente a que se le tramite y resuel-

va, por la Administración competente, su solicitud de concesión de la Cruz de la Constancia en el Servicio con arreglo a la Ley quince de cuatro de agosto de mil novecientos setenta, y a las normas reglamentarias específicas de tal recompensa vigentes al tiempo de su petición, con los efectos pertinentes y que en su caso haya lugar. Sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363), ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 4 de noviembre de 1981.

OLIART SAUSSOL

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME).

27930

ORDEN 111/10183/1981, de 4 de noviembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 22 de abril de 1981, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Rafael Lombar Layus.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Rafael Lombar Layus, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 31 de octubre y 1 de diciembre de 1978 y 15 de marzo de 1979, se ha dictado sentencia con fecha 22 de abril de 1981, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando las cuestiones propuestas por el representante de la Administración, y estimando como estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Brualla y de Piniés, en nombre y representación de don Rafael Lombar Layus, militar retirado, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de fechas treinta y uno de octubre y uno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho y quince de marzo de mil novecientos setenta y nueve, las dejamos sin efecto como no ajustadas a derecho, reconociendo al recurrente el cómputo del tiempo servido como Ayudante eventual de Obras en la Comandancia de la Quinta Región Militar, sin expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363), ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 4 de noviembre de 1981.

OLIART SAUSSOL

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME).

27931

ORDEN 111/10184/1981, de 5 de noviembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 23 de junio de 1981, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña María de los Angeles García Laynes.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, entre partes, de una, como demandante, doña María de los Angeles García Laynes, quien postula por sí misma, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Estado Mayor de la Armada de 4 de octubre de 1977 y 21 de febrero de 1978, se ha dictado sentencia con fecha 23 de junio de 1981, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que no dando lugar a la excepción de inadmisibilidad alegada, debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso número cuatrocientos siete mil ochocientos veintiséis, promovido por el Procurador señor Resch en nombre y representación de doña María Angeles García Laynes contra la Administración General del Estado sobre anulación de las resoluciones del Ministerio de Defensa (Estado Mayor de la Armada) de cuatro de octubre de mil novecientos setenta y siete y